

## **JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

### **Nº 14 DE BARCELONA**

#### **Procedimiento Ordinario 184/2022**

### **SENTENCIA**

En Barcelona, a 13 de junio de 2024.

Doña Rocío Colorado Soriano, Magistrada del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 14 de Barcelona y su Provincia, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo referenciados, en los que tiene la condición de recurrente la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, representado por la Procuradora de los Tribunales Don Ignacio Lopez Chocarro y asistido por el letrado Don Alberto Dorrego de Carlos, teniendo la condición de demandado el Ayuntamiento de Barcelona, representado y asistido por el Letrado Consistorial y como codemandado CONFEDERACIÓ SINDICAT DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE BARCELONA i CATALUNYA CAMINA, ASSOCIACIÓ PELS DRETS DELS VIANANTS representado por el Procurador de los Tribunales Doña FRANCESCA BORDELL SARRÓ y asistido del letrado Don Àlex Solà Paños, y en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y las Leyes de España, y en nombre de S.M. El Rey, ha dictado la siguiente resolución que se basa en los siguientes,

### **ANTECEDENTES DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Por la parte actora, a través de la representación que dejó acreditada en autos, interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT del Ayuntamiento de Barcelona adoptado en sesión del 15 de Febrero de 2022 por el que (i) se aprobó definitivamente el Anteproyecto de reforma de Via Laietana i la calle Jonqueres y (ii) se aprobó definitivamente el Proyecto ejecutivo de reurbanización de la Via Laietana, desde la Pl. Urquinaona a la calle Joaquim Pou, y la calle Jonqueres.

**SEGUNDO.-** Reclamado el expediente administrativo se entregó al actor y demás partes, que evacuaron los trámites de demanda y contestación por su debido orden y previos los correspondientes traslados.

**TERCERO.-** Se recibió el pleito a prueba, practicándose la propuesta por las partes que se consideró admisible con el resultado que obra en autos.

Tras presentar ambas partes escritos de conclusiones, quedaron a continuación los autos conclusos para sentencia.

**CUARTO.-** Por Decreto de 9 de diciembre de 2021 se acordó la cuantía del presente procedimiento en indeterminada.

## **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.- resolución objeto del recurso y alegaciones de las partes.-** El objeto del presente recurso es el acuerdo de la COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT del Ayuntamiento de Barcelona adoptado en sesión del 15 de Febrero de 2022 por el que (i) se aprobó definitivamente el Anteproyecto de reforma de Via Laietana i la calle Jonqueres y (ii) se aprobó definitivamente el Proyecto ejecutivo de reurbanización de la Via Laietana, desde la Pl. Urquinaona a la calle Joaquim Pou, y la calle Jonqueres.

El hecho controvertido es determinar si las obras impugnadas se aprueban dentro del marco de las competencias que ostenta el Ayuntamiento de Barcelona a fin de mejorar las condiciones objetivas de la movilidad, transversalidad, pavimentación, adecuación de aceras, vegetación y mejora y adecuación de diversos servicios preexistentes en el tramo indicado (transporter público de autobús, alumbrado, galerías de servicio etc); o por el contrario, se trata de una arteria principal de la ciudad y su alteración es una modificación del PGM, no siendo competente el Ayuntamiento de Barcelona.

**SEGUNDO.-** En primer lugar debemos de resolver la cuestión de carácter procesal consistente en la falta de legitimación activa del recurrente al no tener un interés legítimo concreto.

La acción pública, una especie de la acción popular prevista en el art. 125 de la Constitución y en el art. 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene recogida expresamente en el campo del urbanismo en la legislación estatal dentro del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tanto en su art. 5, apartados c), d) y f), como en su art. 62 donde literalmente nos dice lo siguiente:

Artículo 62. Acción pública: *"1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística.*

*2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística".*

En el mismo sentido el art. 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña establece la acción pública en el ámbito urbanístico.

Desde un punto de vista procesal, es el art. 19.1.h) de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa la que recoge dicha acción pública cuando indica que: "1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:...h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes."

La STS de 24 de enero de 2001 (Casación núm. 9481/1995) aclara que es perfectamente posible y compatible disponer de los dos tipos de legitimación, la derivada del interés directo en el asunto y la popular otorgada por las leyes para determinados sectores como es el del urbanismo: "En las sentencias de esta Sala de 5 de julio de 1999 y de 21 de febrero de 2000 hemos declarado que es compatible la legitimación por acción pública reconocida en el artículo 304 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, equivalente al antiguo artículo 235 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, con la posesión en quien la ejercita de un interés que le legitime por interés directo y legítimo, conforme al artículo 28.1 a) de la LJCA.

El citado artículo 304 contiene una norma que se refiere única y exclusivamente a la legitimación, reconociendo a cualquier persona acción pública para exigir la observancia del ordenamiento urbanístico, sin necesidad de ser titular de ningún

derecho subjetivo ni de interés alguno, que no sea el interés de la mera defensa de la legalidad.

Esta legitimación, calificada en algunos sectores doctrinales clásicos como anómala en cuanto el concepto se equipara prácticamente con el de capacidad procesal, es típica de nuestro ordenamiento urbanístico y se concede al margen de toda condición subjetiva, permitiendo a cualquiera («quavis de populo») traer a conocimiento de un órgano jurisdiccional la existencia de una vulneración del ordenamiento jurídico adornado por el mero interés de la legalidad; es decir, el interés de que el juez restablezca el orden jurídico vulnerado. Es obvio que también la posee «a fortiori», quien ostenta una posición de interés cualificado en forma subjetiva respecto de la pretensión procesal que se ejercita. La crítica que se formula queda así enervada en forma esencial, al ser correcta la doctrina de la sentencia recurrida”.

La STS de 21 de enero de 2002 (Casación núm. 8961/1997) nos recuerda que "la finalidad prevalente y fundamental del artículo 304 de la Ley del Suelo de 1992 (artículo 235 de la Ley del Suelo de 1976) es la de perseguir y conseguir, por encima de cualquier otra consideración, la observancia en todo caso de la legislación urbanística y del planeamiento urbanístico, por lo que la naturaleza de las causas que hayan inducido al que ejercita tal acción, aun cuando estas sean consideradas como represalia de actuaciones anteriores, tal como sostiene el recurrente, son irrelevantes frente a los fines prevalentes de protección y observancia del ordenamiento urbanístico, en su concreta aplicación”.

Por tanto, la actora, al tratarse de una acción urbanística, tiene legitimación activa no siendo necesario que tenga un interés concreto, tal y como alega la codemandada.

**TERCERO.-** Entrando al fondo del asunto, el Proyecto impugnado se enmarca en un Proyecto urbanístico global “Superilla Barcelona”, en el que, en el presente caso, se impugna la “reurbanización” de la Vía Laietana.

La actora considera que el Proyecto incide gravemente en un vial que pertenece a la red viaria básica del PGM (Plan General Metropolitano de Barcelona, de 1976), según resulta del Plano de Ordenación nº17, de la serie “b3” a escala 1:10.000 de dicho instrumento. Plano de Ordenación que tiene naturaleza de norma jurídica de carácter reglamentario y altera de modo sustancial la funcionalidad de la Vía Laietana, que, según el PGM, es el de una vía de la red viaria básica de interés metropolitano.

Por el contrario, el Ayuntamiento considera que las obras impugnada se aprueban en el marco de las competencias que ostenta el Ayuntamiento de Barcelona a fin de mejorar las condiciones objetivas de la movilidad, transversalidad, pavimentación, adecuación de las aceras, vegetación y mejora y adecuación de diversos servicios preexistentes en el tramo indicado (transporte público de autobús, alumbrado, galerías de servicios etc).

Sin embargo, de la prueba practicada y de las alegaciones realizadas por las partes, debe llegarse a conclusión de que la Via Laietana debe calificarse como “arteria urbana de interés metropolitano” de la red viaria básica que le atribuyen las NNUU del PGM se manifiesta en que posee una clave de identificación de “5” (art. 9 NNUU del PGM), de la que carecen los viales de la red local. Y como tal arteria urbana, se integra en la red viaria básica secundaria, tal y como lo establece el artículo 196.1 NNUU del PGM antes transcrito.

El hecho de que la naturaleza y función de esta vía le fueran asignadas por el PGM, es decir, por una norma reglamentaria vigente, supone que solo puede modificarla la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona (art.66.3 de la Ley 22/1998 de la Carta Municipal de Barcelona), que es un órgano de la Generalidad de Cataluña.

Según la Memoria del Proyecto Ejecutivo, página 6 (folio 1011 del exp.admo.): a) Se reduce sustancialmente la anchura de la calzada: actualmente las aceras tienen una anchura de 2,5 y 2,7 metros a cada lado de la arteria urbana, quedando 14,8 metros para la movilidad metropolitana. El Proyecto prevé reducir la calzada a 11,7 metros, es en un 21%; b) Se reducen los carriles de circulación: en la actualidad existen cinco carriles, tres de bajada y dos de subida, para la circulación rodada. En el Proyecto impugnado pasa a haber dos carriles de bajada y un solo carril ascendente para el tráfico rodado, (y un carril bici de dirección ascendente de 1,90 metros). Por tanto, hay una reducción del 40%.

Por tanto, una vez visto que la Vía Laietana, tiene la función de vial de accesibilidad metropolitana y no estrictamente local o de barrio, se ve que el Proyecto Ejecutivo de reurbanización (un proyecto de obra ordinaria), encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el PGM atribuye a la Vía Laietana sin seguir el procedimiento legalmente previsto para ello y por decisión de un órgano manifiestamente incompetente: la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i

Mobilitat del Ayuntamiento de Barcelona, en vez de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que es un órgano administrativo de la Generalitat de Catalunya.

El Programa Superilla se desarrolla fraccionadamente mediante Proyectos de obra ordinaria tratando de eludir al procedimiento de Modificación Puntual del PGM, que obligaría al Ayuntamiento a tener que consensuarlo con la Generalitat de Cataluña y con el tejido social.

Por lo que procede estimar la demanda al apreciarse defectos de carácter formal en la tramitación del proyecto de obra.

**ÚLTIMO.- costas.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no concurren circunstancias para la imposición en costas.

### **FALLO**

En atención a lo expuesto, he decidido: DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto, debiendo de REVOCAR la resolución impugnada por no ser conforme a derecho. Sin imposición de costas.

Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la Administración demandada para su cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, quedando el original en el libro de resoluciones definitivas de este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

